

## Conflicto en Magallanes y las políticas excepcionales



SUSANA JIMÉNEZ, ECONOMISTA DE LyD

“ La política energética aplicada a la fecha en la Región ha tenido resultados indeseados en el consumo y las decisiones de inversión, lo que pone en riesgo no sólo el abastecimiento futuro sino además la actividad productiva”.

Que Magallanes sea considerada una Zona Extrema (ZE) es razonable. Sólo existe interconexión con el resto del país por aire o mar, se encuentra lejos de los polos de comercio internacional y se vive en condiciones climáticas bastante adversas.

Por lo anterior, los magallánicos gozan de una serie de beneficios excepcionales, entre los que se cuenta el menor precio pagado por el consumo de gas natural y una larga lista de incentivos y exenciones tributarias. Todos ellos creados con la intención de fomentar la actividad económica y mejorar las condiciones de vida de la población en esta región.

Lo anterior, sin embargo, no justifica cualquier medida de apoyo adoptada en el pasado y menos su permanencia indefinida en el tiempo, a menos que así se resuelva en base a una evaluación seria del costo y beneficio de las medidas implementadas. Es en este contexto que debe también evaluarse el beneficio otorgado a la Región de Magallanes en materia de tarificación y bonificación al consumo de gas natural.

La política energética aplicada a la fecha en la Región ha tenido resultados indeseados en el consumo y las decisiones de inversión, lo que pone en riesgo no sólo el abastecimiento futuro sino además la actividad productiva de la zona. Visto así, la decisión de autorizar un alza en las tarifas del gas natural en la Región de Magallanes va en la dirección correcta, porque tiende a sincerar los costos y a dar señales adecuadas de precios, mejora la conservación del recurso, alienta futuras exploraciones y explotaciones de nuevos yacimientos y permite mejorar la focalización del subsidio. Lo anterior puede ser una decisión dolorosa para el bolsillo de los magallánicos, pe-

ro resulta necesaria para sostener el abastecimiento de la región y, de paso, impulsar lo que constituye la principal actividad económica de la zona.

Una forma de enfrentar lo anterior es por la vía de introducir alzas graduales y anunciadas de tarifas y una reducción paulatina de la bonificación al consumo, que en conjunto con una buena campaña de ahorro energético permitiera que la población afectada se ajustara paulatinamente a estos mayores costos. Conjuntamente, se necesitaría rediseñar y focalizar el subsidio otorgado, para que éste compense efectivamente a los sectores más vulnerables de la población.

Sin embargo, desde un punto de vista más de largo plazo, lo que se requiere es reevaluar las políticas de incentivos que se otorgan a las ZE, de modo tal de fomentar un real desarrollo de la actividad regional y mejorar el bienestar de sus habitantes, sin comprometer la sustentabilidad de las medidas. En el caso de la Región de Magallanes, esto pasa por redirigir los recursos que hoy se gastan en instrumentos de cuestionada eficacia hacia inversiones de infraestructura, al fortalecimiento de las áreas con mayor potencial de la región con incentivos específicos; y al rediseño de las políticas de subsidios de modo tal que los recursos se destinen principal y únicamente a las personas de menores recursos.

Más que echar atrás la medida anunciada, como se le está pidiendo al Gobierno, resultaría deseable que éste se jugara por sincerar los costos y beneficios de cada una de las medidas de apoyo aún vigentes y evaluara si estas deben modificarse, sustituirse o eliminarse, para beneficio del desarrollo regional y nacional.